

Las nuevas sociedades profesionales serán un miembro más en los colegios

A fondo

Sección elaborada conjuntamente por el Economista y Grupo Editorial El Derecho

Los colegios profesionales se encuentran con un nuevo reto ante la entrada en vigor de la Ley 2/2007, de 15 de marzo en lo referente a la inscripción de las sociedades profesionales y el control del sistema de incompatibilidades.

En 2007 adquirió vigencia la ley que da paso a un nuevo tipo de colegios, que son las entidades que ejercen una actividad profesional en común, y que se constituyen como centro subjetivo de imputación del negocio jurídico que se establece con el cliente.

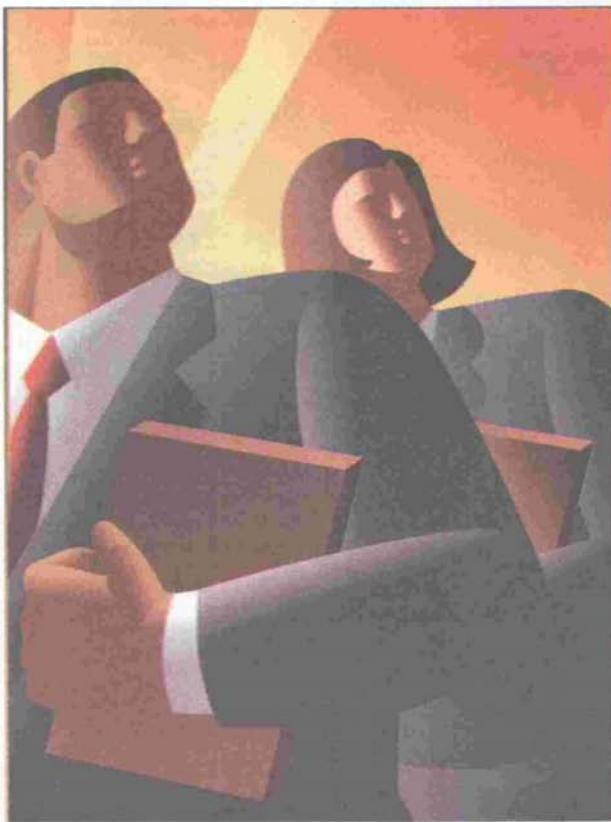
Con esta norma, nacen nuevas obligaciones para los colegios, que tienen que cursar la inscripción de estas sociedades como requisito constitutivo, complementario de la inscripción en el Registro Mercantil.

La disposición transitoria segunda establece que dichos registros tendrán que estar habilitados en el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de la misma, algo que sucedió el pasado 16 de marzo.

Además, las sociedades preexistentes a la entrada en vigor de la Ley, que deben adaptar sus estatutos, tienen que solicitar su acceso a ellos en el plazo máximo de un año desde su constitución.

Sin embargo, existe mucha incertidumbre acerca de la misión concreta que desempeñarán los colegios profesionales en la inscripción de estas sociedades.

La duda que se plantea es si debe valorar éste otra vez la adecuación de la sociedad a la nueva norma o la inscribirá como colegiado de forma automática, puesto que toda sociedad que pretenda acceder al registro colegial debe inscribirse previa-



GETTY

mente en el registro mercantil, y es el registrador quien comunicará la inscripción al colegio en cuestión.

Por el momento, los colegios están informando a sus colegiados mediante carta de la entrada en vigor de la Ley y de la necesidad de adaptar sus estatutos, algo que muchos profesionales están interpretando como un mandato de su colegio para formalizar escritura de adaptación a la nueva forma societaria.

Sin embargo, un dato importante a tener en cuenta es que en ningún caso tendrán obligación de ade-

cuarse a la nueva normativa sin analizar previamente si entran en su ámbito subjetivo de aplicación.

Sólo si la respuesta es afirmativa tendrán obligación de hacerlo. En ese caso habrán de cumplir toda una serie de requisitos, entre los que los más relevantes son, en primer lugar, la obtención por parte de los socios profesionales de una certificación de su colegio en la que consten su número de colegiado y la manifestación de que no se encuentra incurso en ninguna causa de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

En segundo lugar, la sociedad, co-

mo profesional que es, debe obtener un seguro de responsabilidad, aunque, si bien es cierto, éste no es requisito para su inscripción.

En tercer término, es imprescindible que, al menos, las tres cuartas partes del capital social, esté en manos de los socios profesionales, y las tres cuartas partes de los miembros del órgano de administración deben ser socios de esta naturaleza, y en el caso de que existieran consejeros delegados, éstos deben ser también socios profesionales.

Incompatibilidades

Otra cuestión de interés es la función de los colegios en el marco de las incompatibilidades profesionales. Las sociedades profesionales pueden tener carácter multidisciplinar, pero las actividades que desempeñan no pueden ser incompatibles entre sí. Sin embargo ¿quién y cómo se determina la existencia de incompatibilidades?

Hasta la fecha los distintos colegios han ayudado a definir las profesiones que no eran compatibles, existiendo normativa aplicable al respecto. Sin embargo, la disposición final segunda habilita al Consejo de Ministros, por un lado, a dictar disposiciones reglamentarias en desarrollo de la ley sobre esta materia y, por otro lado, le autoriza expresamente a regular mediante Decreto-Ley el régimen de incompatibilidades aplicable a las sociedades profesionales y a los profesionales que en ella desarrollan su actividad.

Hasta que no entre en vigor el citado Decreto, se estará a lo previsto en las normas actualmente aplicables sobre la materia. Pero cuando el Consejo de Ministros haga uso de la autorización legal citada, con toda seguridad nacerán nuevas incompatibilidades y entonces ¿qué sucederá con las sociedades ya inscritas cuyo objeto social contenga actividades incompatibles?